



**Consejo Económico  
y Social**

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/2004/22  
2 de junio de 2004

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
Subcomisión de Promoción y Protección  
de los Derechos Humanos  
56º período de sesiones  
Tema 4 del programa provisional

**DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

**Restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso  
de los refugiados y desplazados internos**

**Informe preliminar presentado por el Relator Especial,  
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, de conformidad con  
la resolución 2002/7 de la Subcomisión**

**INTRODUCCIÓN**

1. En su 55º período de sesiones, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en su resolución 2003/18, acogió con beneplácito el informe preliminar presentado por el Relator Especial, Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, sobre la restitución de viviendas y de patrimonio en el contexto del regreso de los refugiados y los desplazados internos (E/CN.4/Sub.2/2003/11) e hizo suyas las conclusiones y recomendaciones que contiene. En el informe preliminar se presenta una perspectiva general de casos reales que se han dado en todo el mundo en los que la restitución se utilizó como un remedio, en particular en las situaciones posteriores a un conflicto. El estudio aporta asimismo un análisis de los obstáculos comunes a la restitución y destaca la importancia de la restitución como una forma de justicia restitutiva.

2. Partiendo de la constancia de que, hasta la fecha, los criterios relativos a la restitución de las viviendas y el patrimonio siguen siendo dispares y que muchas políticas relativas a la restitución se ven afectadas por estrategias conceptualmente defectuosas, políticas parciales e instituciones ineficaces que no han contado con los apoyos internos y externos necesarios para completar sus mandatos, el estudio preliminar llega a la conclusión, entre otras, de que es necesario establecer un método global para la política de restitución, respaldado por el derecho internacional de los derechos humanos.
3. Para proporcionar orientación con respecto al establecimiento de normas internacionales en esta esfera, el presente informe incluye un conjunto de "proyectos de principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio a los refugiados y personas desplazadas (de ahora en adelante, "proyectos de principios")"<sup>1</sup>. Estos proyectos de principios son coherentes con la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional y tienen por finalidad aportar orientación a los Estados que tratan de aplicar programas de restitución, así como a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que abordan las cuestiones del desplazamiento de la población, la creación de la paz con posterioridad a los conflictos y la restitución. Los proyectos de principios reflejan la opinión de que un enfoque basado en los derechos humanos con respecto al retorno y la restitución producirán resultados equitativos y sostenibles para lograr la restauración de los derechos a la vivienda y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas y para crear una estabilidad a largo plazo.
4. Estos proyectos de principios se han elaborado en consulta con diversos organismos y organizaciones que participan en los procesos de restitución, y reflejan las conclusiones más recientes de las investigaciones en ese campo<sup>2</sup>. Se espera que en el curso del próximo año se pueda volver a prolongar el proceso de consultas para utilizar la experiencia y los conocimientos de todos los organismos y órganos pertinentes de las Naciones Unidas, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como para facilitar la elaboración de estos proyectos de principios. En particular, el Relator Especial desearía que a principios de 2005 se convoque una reunión internacional de alto nivel para examinar los proyectos de principios. Se sugiere que los proyectos de principios se difundan lo más ampliamente posible para facilitar esta consulta antes de que el Relator Especial presente su informe final en 2005.

---

<sup>1</sup> En su informe preliminar, el Relator Especial pidió que se formularan "directrices y principios universales para la restitución de viviendas y patrimonio a los refugiados y otras personas desplazadas, así como una política modelo para la restitución de viviendas y patrimonio a los refugiados y otras personas desplazadas". Previas consultas, sin embargo, se decidió que la mejor línea de acción consistiría en concentrarse en la elaboración de un conjunto de principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio que tenga en cuenta el cambio en el título propuesto. Estos principios tienen por finalidad informar a los órganos de decisión en el plano nacional. Como tales, los principios establecen varios derechos concretos que han de ser protegidos en las políticas y legislación relativas a la restitución en el plano nacional.

<sup>2</sup> El Relator Especial desearía expresar especialmente su agradecimiento al Centro de Derechos de Vivienda y Desahucios y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por su asistencia en la preparación de este informe.

## I. ANTECEDENTES

5. El impulso del actual proyecto ilustra la relación vital y colaborativa entre la Subcomisión y los órganos de seguimiento creados por tratados sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas. En 1996, en la séptima reunión de los presidentes de órganos creados por tratados sobre derechos humanos, los presidentes de los órganos de seguimiento de los tratados recomendaron que los órganos creados por tratados asuman una función más activa en la prestación de apoyo, la sugerencia de temas y la cooperación y preparación de estudios por la Subcomisión<sup>3</sup>. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) examinó esta cuestión en su 50º período de sesiones en 1997 y decidió proponer a la Subcomisión nueve temas para la preparación de estudios, entre ellos uno sobre el "retorno del patrimonio de los refugiados o las personas desplazadas"<sup>4</sup>.

6. En esa época, el CERD advirtió que "la huida de centenares de miles de refugiados o de personas desplazadas que abandonan sus hogares y sus bienes a causa de un conflicto armado da lugar con frecuencia a que se apoderen de esos bienes personas sin derecho a hacerlo. Así sucede en la actualidad en la región de los Grandes Lagos, en Bosnia y Herzegovina, en Chipre y en otros lugares. A su regreso a sus lugares de origen, todos esos refugiados y todas esas personas desplazadas tienen derecho a que se les devuelvan los bienes de los que fueron privados durante el conflicto y a ser indemnizados por los bienes que no pudieron serles devueltos. Además, deberán considerarse nulos de pleno derecho todos los compromisos o declaraciones que se hayan efectuado bajo compulsión acerca de esos bienes. Este problema es de tal magnitud que será menester estudiarlo basándose en el derecho internacional y en los instrumentos internacionales vigentes en el terreno de los derechos humanos"<sup>5</sup>. Michael Banton, Presidente del CERD, en carta de fecha 19 de marzo de 1997, comunicó estas propuestas al Presidente del 48º período de sesiones de la Subcomisión y pidió que se las presentara a la Subcomisión en su 49º período de sesiones<sup>6</sup>.

7. En su 49º período de sesiones, la Subcomisión, en su resolución 1997/5, expresó su agradecimiento al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial por haber recomendado futuros estudios a la Subcomisión que podrían constituir aportaciones útiles a la labor del Comité. Además, en su decisión 1997/112, la Subcomisión decidió prestar especial atención a las cuestiones propuestas por órganos creados en virtud de tratados para elegir nuevos temas de estudio. La Subcomisión respondió asimismo a la solicitud del Comité preparando documentos de trabajo y estudios globales posteriores autorizados por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, con respecto a dos de los otros temas propuestos por el Comité sobre la acción positiva y los derechos de los no ciudadanos.

---

<sup>3</sup> A/51/482, párr. 53.

<sup>4</sup> Para la lista completa de temas propuestos a la Subcomisión, véase E/CN.4/Sub.2/1997/31, anexo.

<sup>5</sup> *Ibíd.*

<sup>6</sup> *Ibíd.*

8. En su resolución 1999/47, la Comisión de Derechos Humanos alentó a la Subcomisión a proseguir su labor sobre la cuestión de la restitución de las viviendas y el patrimonio en el contexto del retorno de los refugiados y las personas internamente desplazadas. En su 53º período de sesiones, la Subcomisión, en su decisión 2001/122, encomendó al Sr. Paulo Sérgio Pinheiro la preparación de un documento de trabajo sobre la restitución del patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, para que lo sometiera a la Subcomisión con el fin de que ésta pudiera adoptar una decisión en su 54º período de sesiones sobre la viabilidad de un estudio global sobre ese tema.

9. El documento de trabajo sobre la devolución de los bienes de los refugiados o de las personas desplazadas (E/CN.4/Sub.2/2002/17), aporta unas observaciones preliminares sobre el derecho al retorno a su lugar de origen y la función de la restitución de la vivienda y el patrimonio, y establece las bases jurídicas en el marco de la legislación internacional sobre los derechos humanos y el derecho humanitario que protegen ese derecho. Destaca asimismo la importancia de la restitución de la vivienda y el patrimonio para el restablecimiento de soluciones duraderas al desplazamiento. El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) impone a la organización la obligación de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados prestando ayuda a los gobiernos para que faciliten su repatriación voluntaria, o su "asimilación" dentro de comunidades nacionales<sup>7</sup>. Aunque no existe ninguna jerarquía entre las tres soluciones (repatriación voluntaria, integración local en países de asilo y reasentamiento en terceros países), en la práctica, la repatriación voluntaria, cuando resulta viable, ha pasado a ser la preferida de las tres opciones<sup>8</sup>. A este respecto, el ACNUR ha reconocido que la restitución o el acceso a la vivienda y a los derechos de propiedad son esenciales para lograr retornos sostenibles.

10. Con el fin de facilitar la continuidad de esta labor, en su 54º período de sesiones, la Subcomisión, en su resolución 2002/7, decidió encomendar al Relator Especial, Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, la tarea de preparar un estudio global sobre la restitución de la vivienda y el patrimonio en el contexto del retorno de los refugiados y los desplazados internos tomando como base su documento de trabajo, así como las observaciones formuladas y los debates celebrados en el 54º período de sesiones de la Subcomisión y en el 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. En su 59º período de sesiones, en su decisión 2003/109, la Comisión aprobó la decisión de la Subcomisión.

11. El estudio preliminar presentado a la Subcomisión en su 55º período de sesiones por el Relator Especial sobre la restitución de la vivienda y el patrimonio en el contexto del retorno de los refugiados y los desplazados internos (E/CN.4/Sub.2/2003/11) aporta una descripción general de situaciones anteriores que entrañaban la restitución de las viviendas y el patrimonio y señala algunos de los obstáculos comunes a la aplicación eficaz de las políticas y los programas de restitución de las viviendas y el patrimonio. Entre éstos cabe mencionar la ocupación

---

<sup>7</sup> Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cap. 1, párr. 1.

<sup>8</sup> Véase, por ejemplo, la conclusión N° 56 (XL)-1989 sobre soluciones duraderas y protección de los refugiados, aprobada por el Comité Ejecutivo del ACNUR; y la conclusión N° 89 (LI)-2000 sobre la protección internacional.

secundaria, la destrucción de las propiedades, la pérdida o destrucción del patrimonio, las instituciones ineficaces y los programas discriminatorios de restitución<sup>9</sup>.

12. Después de un meticuloso examen, la conclusión central del estudio preliminar fue que sigue existiendo una marcada diferencia a nivel internacional en lo que respecta a una norma definitiva destinada a orientar la elaboración y aplicación de políticas y programas nacionales de restitución, sobre la base de la normativa internacional sobre los derechos humanos y el derecho humanitario. Aunque se ha creado un conjunto de programas y normas nacionales que abordan diversos aspectos de la restitución, ésta tiene todavía que refundirse en una norma única. Demasiado a menudo, las políticas y los programas de restitución han adoptado diversos enfoques con respecto a la dificultad de la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, lo que da lugar a resultados insatisfactorios.

13. El estudio preliminar, por consiguiente, recomendaba que la Subcomisión se esforzara por unificar las normas vigentes y por elaborar una norma internacional autorizada sobre la restitución, en colaboración con todos los organismos y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y las ONG. El presente informe constituye la primera incursión en esa tarea, y abarca los "proyectos de principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas", que se somete a la consideración de la Subcomisión.

## **II. LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS**

14. La cuestión de la restitución de las viviendas y el patrimonio constituye un problema acuciante para millones de personas desplazadas por todo el mundo. De hecho, en los últimos tiempos ninguna región del mundo ha quedado inmune de una migración humana masiva provocada, entre otras razones, por conflictos armados, violaciones de los derechos humanos, situaciones de violencia generalizada y desastres naturales y causados por el hombre. Actualmente, en todo el mundo hay aproximadamente 12,4 millones de refugiados<sup>10</sup> y una cifra adicional de 25 millones de desplazados internos<sup>11</sup>. Para los que han sido desenraizados por la fuerza de sus hogares y tierras, regresar al propio hogar en condiciones de seguridad y dignidad se considera a menudo como la solución más deseada, sostenible y digna al desplazamiento.

15. Con todo, como se indica en el informe preliminar, el regreso al hogar está a menudo cargado de incertidumbre política, incluso en situaciones en que ha cesado la violencia, y los procesos de restitución se ven a menudo comprometidos por una incapacidad de hacer frente con

---

<sup>9</sup> Scott Leckie (ed.), *Returning Home: Housing and Property Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons* (Ardsley, Nueva York, Transnational Publishers, 2003).

<sup>10</sup> ACNUR, *Refugees by Numbers* (2003).

<sup>11</sup> El proyecto mundial de las personas internamente desplazadas, *Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments in 2003* (2004).

eficacia a los obstáculos jurídicos y prácticos y a una puesta en aplicación adecuadamente forzosa del estado de derecho. Aunque la comunidad internacional ha hecho importantes aportaciones a la aplicación de diversos programas de repatriación voluntaria, sigue existiendo la necesidad de un conjunto unificado de normas internacionales sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio en el contexto del regreso de los refugiados y otras personas desplazadas.

16. Los proyectos de principios contribuyen al establecimiento de esas normas internacionales y se basan en los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario vigentes para establecer un enfoque universal con respecto a la política de restitución de las viviendas y el patrimonio tanto en el plano nacional como en el internacional. En ese sentido, los proyectos de principios no pretenden especificar o promover nuevos derechos. Al contrario, se fundan en derechos vigentes (tal como están confirmados y establecidos en la práctica) admitidos por la comunidad internacional, y los aplican a la cuestión concreta de la restitución de las viviendas y el patrimonio como una forma de justicia restitutiva. Estos derechos humanos y normas humanitarias internacionales subyacentes están integrados en los proyectos de principios y se explican también en el proyecto de comentario (E/CN.4/Sub.2/2004/22/Add.1).

17. En particular, los proyectos de principios reflejan los derechos humanos y los principios humanitarios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>12</sup>, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>13</sup>, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>14</sup>, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas

---

<sup>12</sup> El artículo 13 estipula que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. El artículo 17 considera que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El artículo 25 afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

<sup>13</sup> El párrafo 1 del artículo 11 estipula que "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha suministrado asimismo una orientación importante con respecto a las normas jurídicas internacionales relativas más concretamente al derecho a una vivienda adecuada (véase el Comentario general N° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada (E/1992/23)) y el derecho a no ser objeto de desalojos forzosos (véase el Comentario general N° 7 sobre los desalojos forzosos (E/C.12/1997/4)).

<sup>14</sup> El párrafo 3 del artículo 2 estipula que cada uno de los Estados Partes se compromete a garantizar que:

"a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

civiles en tiempo de guerra<sup>15</sup> y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)<sup>16</sup>. Estos proyectos de principios reflejan igualmente otras normas internacionales pertinentes, en particular los Principios rectores de los desplazamientos internos<sup>17</sup> y el proyecto de Principios básicos y directrices sobre el derecho a un recurso y una indemnización de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales<sup>18</sup>.

---

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

El párrafo 1 del artículo 12 prescribe que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia (véase el Comentario general N° 27 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)). El párrafo 1 del artículo 17 estipula que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación (véase el Comentario general N° 16 sobre el derecho al respeto de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, y la protección de su honra y reputación (HRI/GEN/1/Rev.6)).

<sup>15</sup> *United Nations Treaty Series*, vol. 75, pág. 287. Véanse, en particular, los artículos 49, 53, 70 y 134.

<sup>16</sup> *United Nations Treaty Series*, vol. 1125, pág. 609. Véase, en particular, el artículo 17.

<sup>17</sup> E/CN.4/1998/53/Add.2. El párrafo 2 del principio 29 estipula que "Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan".

<sup>18</sup> E/CN.4/2000/62. En el proyecto de principios básicos se señala que las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales, como las víctimas de los desalojos forzados, tienen derecho a un recurso. El derecho a un recurso incluye, en particular, la reparación de los daños sufridos. La restitución es una forma particular de reparación. El término "restitución" se refiere a un recurso equitativo, o una forma de justicia restaurativa, por medio del cual a las personas que han sufrido pérdidas o daños se las repone en la medida de lo posible en su situación original anterior a la pérdida o al daño (*statu quo ante*). La restitución incluye: el restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la situación social, la vida familiar y la ciudadanía; el regreso al propio lugar de residencia; y el restablecimiento del empleo y la devolución de la propiedad.

18. Además, los proyectos de principios incorporan algunas de las disposiciones más útiles de diversas políticas y programas nacionales de restitución preexistentes, con inclusión de los establecidos para Bosnia y Herzegovina<sup>19</sup>, Camboya<sup>20</sup>, Chipre<sup>21</sup>, Guatemala<sup>22</sup>, Kosovo<sup>23</sup>, Sudáfrica<sup>24</sup> y Rwanda<sup>25</sup>. El proyecto de principios incorpora asimismo las lecciones aprendidas y se basa en algunas de las prácticas más idóneas aplicadas en los recientes esfuerzos de restitución en situaciones posteriores a conflictos.

19. Los proyectos de principios tienen por finalidad servir de base para la elaboración de políticas y programas de restitución en los planos nacional e internacional. Como están enraizados en derechos humanos y normas humanitarias internacionales universalmente aplicables, deben considerarse como principios universales que expresan los derechos humanos básicos garantizados que deben aceptarse. Es de esperar, que, con el tiempo, después de proceder a su revisión y a consultas, el proyecto de principios pueda ser aprobado por la Subcomisión así como por otros órganos competentes de las Naciones Unidas. Ello constituiría un paso importante para garantizar que todas las estrategias, políticas y programas de restitución, en la forma aplicada tanto a nivel nacional como internacional, reflejen los derechos humanos y las normas y disposiciones humanitarias internacionales.

20. Los proyectos de principios se han dividido en siete secciones. La sección I especifica los principios universales esenciales que sirven de fundamento sobre el que se asientan todas las disposiciones posteriores. La sección II aborda los derechos necesarios para garantizar la protección contra el desplazamiento. La sección III se ocupa específicamente de la protección de los derechos de los refugiados y de las personas desplazadas, con inclusión del derecho a un retorno seguro, voluntario y digno y el derecho a un recurso en casos de violación de los derechos humanos. La sección IV se ocupa de la cuestión concreta de la restitución de las viviendas y el patrimonio, y esboza directrices precisas sobre políticas a este respecto.

---

<sup>19</sup> Véase el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, anexo 7: Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas (A/50/790-S/1995/1999).

<sup>20</sup> Véase el Acuerdo sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya, firmado en la Conferencia de París sobre Camboya en 1991 (A/46/608-S/23177).

<sup>21</sup> Véase el conjunto de ideas sobre un acuerdo marco general sobre Chipre, propuesto por el Secretario General en 1992 (S/24472, anexo).

<sup>22</sup> Véase el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas (Acuerdos de paz de Guatemala) (A/49/882-S/1995/256). Véase también el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado (A/48/954-S/1994/751, anexo I).

<sup>23</sup> Véase el reglamento de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) N° 1999/23 sobre establecimiento de la Dirección de Vivienda y Propiedades y de la Comisión de Reclamaciones sobre Viviendas y Propiedades.

<sup>24</sup> Véase Sudáfrica, Ley relativa a la restitución de los derechos sobre la tierra, 1994 (Ley N° 22).

<sup>25</sup> Véase el Acuerdo de Paz de Arusha de 4 de agosto de 1993.



La sección V contiene pautas sobre el fortalecimiento de los procedimientos, las instituciones, los mecanismos y los marcos jurídicos que tienen por objeto facilitar el proceso de restitución. La sección VI examina la función de las organizaciones internacionales y la sección VII trata de la manera de interpretar los proyectos de principios.

21. Estos proyectos de principios van asimismo acompañados de un proyecto de comentario (E/CN.4/Sub.2/2004/22/Add.1). El proyecto de comentario tiene por objeto orientar la interpretación de los proyectos de principios y señalar explícitamente la base jurídica internacional de las normas establecidas en los proyectos de principios. El proyecto de comentario debe considerarse como parte integrante de los proyectos de principios, que se seguirá modificando a medida que los propios proyectos de principios cambien.

## **Anexo**

# **PROYECTOS DE PRINCIPIOS SOBRE**

## **Sección I**













directrices relativas a la organización institucional, la capacitación del personal y los expedientes pendientes, los procedimientos de investigación y ejecución, la verificación de la propiedad de los bienes y otros derechos de propiedad, así como los mecanismos de adopción de decisiones, ejecución y apelación. Los Estados podrán optar por integrar los mecanismos tradicionales de solución de controversias en este proceso, siempre y cuando se ajusten a los principios y normas internacionales de los derechos humanos.

## **18. Accesibilidad a los procedimientos de reclamación**

18.1. En todas las zonas afectadas se establecerán centros y oficinas de tramitación de las reclamaciones en las que residan actualmente los potenciales reclamantes, o unidades móviles, para garantizar la accesibilidad a los reclamantes potenciales.

18.2. Los Estados velarán por que todos los aspectos del proceso de reclamaciones de restitución, con inclusión de los procedimientos de apelación, sean sencillos y equitativos, así como gratuitos. En particular, se establecerán formularios de reclamación que sean sencillos y fáciles de entender y utilizar, y que se pondrán a disposición en el primer idioma o en los idiomas de los grupos afectados. Se contará con el apoyo de asesores para ayudar a las personas a llenar y a presentar todos los formularios necesarios. Las mujeres solteras no serán discriminadas en este proceso.

18.3. Las personas que lo necesiten, incluidos los analfabetos y los discapacitados, contarán con una asistencia especial para garantizar que no se les niegue el acceso a los procedimientos destinados a resolver las reclamaciones de restitución.

18.4. Los Estados se asegurarán de que las personas afectadas tengan conocimiento del procedimiento de restitución y de que la información acerca de este procedimiento se ponga fácilmente a disposición, y en un lenguaje fácil de entender para las personas sin conocimientos en la materia.

## **19. Medidas legislativas**

19.1. Los Estados garantizarán el derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas como cuestión de derecho por medio de las medidas legislativas necesarias, incluso mediante la aprobación, modificación, reforma o revocación de las leyes, los reglamentos y las prácticas pertinentes. Los Estados deben establecer un marco jurídico para garantizar la restitución, que sea claro, coherente y, siempre que sea posible, unificado en una única ley.

19.2. Los Estados garantizarán que toda norma o ley pertinente indique claramente todas las personas y/o grupos afectados que tengan jurídicamente derecho a la restitución de sus hogares, tierras y propiedades, en particular los refugiados y las personas desplazadas.

19.3. La legislación nacional relativa a la restitución deberá ser plenamente coherente con el derecho interno, así como plenamente compatible con los acuerdos pertinentes preexistentes, como los acuerdos de paz, los acuerdos de repatriación voluntaria, etc., en la medida en que esos acuerdos sean compatibles con la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.

## **20. Prohibición de las leyes arbitrarias y discriminatorias**

20.1. Los Estados no adoptarán ninguna ley que menoscabe indebidamente el proceso de restitución, en particular las relativas al abandono o a limitaciones arbitrarias, discriminatorias o de otro modo injustas.

20.2. Los Estados anularán la aplicación de leyes injustas o arbitrarias, y leyes que produzcan de otro modo un efecto discriminatorio, y adoptarán de inmediato medidas para revocar esas leyes.

20.3. Los Estados velarán por que todas las políticas nacionales relativas al derecho de restitución garanticen plenamente los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad de hecho y de derecho.

20.4. Ninguna persona será procesada o castigada por presentar una reclamación de restitución.

## **21. Prestación de asistencia jurídica**

21.1. Se prestará una asistencia jurídica adecuada (de ser posible, gratuitamente) a los que traten de presentar una reclamación de restitución.

## **22. Aplicación**

22.1. Los Estados velarán, mediante dispositivos jurídicos y otros dispositivos adecuados, por que los gobiernos locales y nacionales estén jurídicamente obligados a respetar, a aplicar y a hacer cumplir las decisiones adoptadas por órganos competentes encargados de la restitución.

22.2. Los Estados designarán a organismos públicos concretos a los que encomendarán el cumplimiento de las reclamaciones concedidas relativas a la restitución de la vivienda y el patrimonio.

## **Sección VI**

### **LA FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES**

## **23. Responsabilidad de la comunidad internacional**

23.1. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar de manera que promueva y proteja el derecho a la restitución de la vivienda y el patrimonio, así como el derecho a un regreso seguro, voluntario y digno.

## **24. Mantenimiento internacional de la paz**

24.1. El éxito y la eficacia de los programas de restitución de la vivienda y el patrimonio exigen también que las organizaciones internacionales cumplan sus obligaciones de mantenimiento de la paz, con el fin de salvaguardar situaciones internas estables en las que

puedan aplicarse con éxito programas de restitución adecuados, con inclusión de la protección de los registros de la propiedad.

24.2. Las organizaciones internacionales deben tratar también de garantizar la compatibilidad entre las políticas y prácticas nacionales de restitución y las normas internacionales de derechos humanos y humanitarias.

## **Sección VII**

### **INTERPRETACIÓN**

#### **25. Interpretación**

25.1. No se deberá interpretar que estos Principios limitan, alteran o menoscaban de algún otro modo las disposiciones de cualquier instrumento jurídico internacional relativo a los derechos humanos o a la ley humanitaria internacional que sean compatibles con las normas reconocidas por el derecho nacional.

25.2. El comentario conexo constituirá la principal interpretación autorizada de los Principios.

-----